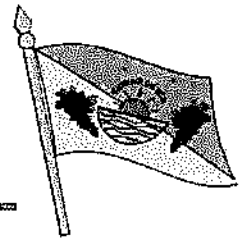




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 095 -2022-AMPI

ICA, 21 FEB 2022

VISTO: El, Exp. Adm. Tramite Virtual N° 3103-2020-GTTSV, Oficio N° 0627-2020-GTTSV-MPI, Informe Legal N° 1411-2020-AL/LAPC-GTTSV-MPI, Cedula de Notificación N° 000423, Resolución Gerencial N° 964-2020-GTTSV-MPI, Informe Legal N° 0997-2020-AL/LAPC-GTTSV-MPI, Informe N° 1266-2020-SGTT-GTTSV-MPI, Oficio N° 21-2020-AL/LAPC-GTTSV-MPI, Informe Final de Instrucción N° 274-2020-GTTSV-MPI, Copia de Papeleta de Infracción al Transito N° 195-218, Recurso de nulidad de fecha 31/08-2020, el Informe Legal N° 002-2022-HABH-GAJ-MPI y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 27680 de Reforma Constitucional, concordante con el Art. II de T.P. de la Ley N° 27972, establecen que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia, con sujeción a Ley.

Que, con el Expediente Administrativo, trámite virtual N° 3103-2020-SGTT-MPI, de fecha 29 de octubre del 2020, el administrado al amparo del Art. 218° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS el que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, viene en interponer su recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial N° 964-2020-GTTSV-MPI, de fecha 29 de octubre del 2020.

Que, de fecha 27/08/2020, se le impone la papeleta de infracción N° 195218 al apelante con código de infracción M-03, MUY GRAVE por conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional.

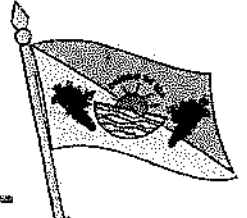
Que, el acto administrativo apelado Resuelve en su Artículo Primero: Declarar Infundado el descargo presentado por el infractor contra la imposición de la PIT, N° 195218, de fecha 27/08/2020, con código de infracción N° M-03, por las consideraciones expuestas en la presente resolución; Artículo Segundo: Imponer la Sanción de multa de 50% de la UIT, vigente a la fecha del pago y la inhabilitación para obtener una licencia por tres (3) años, por el siguiente período: Inicia el 27/08/2020 y culminara indefectiblemente el 27/08/2023; Artículo Tercero: Regístrese la presente resolución en el Registro Nacional de Sanciones.

Que, el apelante señala que al emitirse el acto administrativo apelado se ha cometido delitos que denunciara y que peticionara la correspondiente indemnización económica por los daños y perjuicios que se le ha ocasionado a su persona al encontrarse su vehículo retenido en forma ilegal en el Depósito Municipal, por espacio de dos meses, asimismo menciona la Ordenanza Municipal N° 008-2020-MPI y que se le debió imponer la papeleta tipificada como "E" 23, y no el código M-03, la cual se impone a los conductores que conducen a vehículos mayores de conformidad a lo que establece el D.S. N° 016-2009-MTC.

Que, el administrado indica que la Ordenanza Municipal N° 008-2020-MPI, que regula el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículo menores motorizados y no.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Motorizados en la Provincia de Ica, la cual establece en su tabla de infracciones y sanciones a los conductores lo siguiente:

"E" 23 Muy Grave por conducir sin contar con licencia de conducir o teniéndola no corresponde a la clase y categoría exigida a que la misma se encuentra vencida, retenida, cancelada o suspendida; cuya sanción es el 5% de la UIT, más el internamiento del vehículo en el depósito municipal; y que la infracción ha sido impuesta trasgrediendo las formalidades establecidas en el D.S. N° 028-2009-MTC, y D.S. N° 016-2009-MPC, O.M. N° 008-2020-MPI.

Que, el expediente fue recepcionado, a raíz de la aparición del CORONA VIRUS COVI 19, en nuestro país se emite el D.S. N° 044-2020-PCM con el cual se dispuso el Estado de Emergencia a Nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria que afronta el Perú, a causa de la propagación de esta enfermedad que pone en grave riesgo la salud y la integridad de las personas dado sus efectos y alcances nocivos, como medidas complementarias se emite el D.S. N° 044-2020-PCM con la cual se establece limitaciones al ejercicio de derecho de libertad de tránsito de las personas, como el aislamiento social obligatorio, modificado con el D.S. N° 046-2020-PCM, posteriormente se emitió el D.S. N° 051-2020-PCM en el cual se dispuso la prórroga del estado de emergencia, modificado por el D.S. N° 053-2020-PCM con la finalidad de establecer la inamovilidad nacional en algunas zonas del territorio del Perú, modificado con el D.S. N° 057-2020-PCM, con D.S. N° 058-2020-PCM, con D.S. N° 061-2020-PCM y demás que se emitieron en el transcurso del tiempo que no permitieron concluir con el trámite que corresponde en el presente caso.

Que, se ha efectuado el exegesis de la documentación que corre en el presente expediente, el Derecho de Defensa protege el estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo. Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pase a atribuirse la comisión de un acto u omisión antijurídica, se le sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle, ser oído o formular sus descargos con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso.

Que, el recurso de apelación se ha presentado dentro del plazo legal; el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del procedimiento Administrativo General, señala que uno de los principios del procedimiento administrativo, es el debido procedimiento, por el cual los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados, a expresar sus argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; a impugnar las decisiones que le afecten.

Que, con respecto al derecho de ofrecer pruebas y producir pruebas; esta garantía faculta a los administrados a presentar como medio de prueba que sean pertinentes para fundamentar sus argumentos, así como garantizar que la autoridad administrativa actúe y valore cada una de las pruebas admitidas antes de emitir una decisión en el procedimiento administrativo. Conviene señalar que la producción y valoración de pruebas está vinculada a la motivación de las decisiones y al resultado del procedimiento administrativo, dado que su consideración define el sentido de la decisión final. Al respecto, el Tribunal Constitucional refiere que este derecho resulta trascendental en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores. En tal sentido sostiene que todo administrado, para la defensa de sus derechos puede presentar pruebas de descargo, las.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



Cuáles deben ser necesariamente valoradas por la Administración Pública para emitir una decisión final, es decir para concluir si corresponde o no la imposición de una sanción administrativa; tal como se indica en la Guía sobre la Aplicación del Principio - Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2013-JUS/DNAJ Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consecuentemente el administrado en su recurso de apelación no presenta prueba nueva para rebatir lo resuelto en la Resolución de Gerencia N° 964-2020-GTTSV-MPI.

Que, en consideración de lo antes indicado debemos de señalar que el administrado no ha procedido a presentar prueba alguna que permita determinar que no se ha cometido la infracción y consecuentemente la papeleta de infracción al tránsito ha sido impuesta correctamente conforme lo establece el artículo 326° del decreto Supremo N° 016-2009-MTC, modificado por el artículo 1° del decreto Supremo N° 003-2014-MTC.

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre establece que "Las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes competencias en materia de transporte y tránsito terrestre, en el tema de fiscalización: b) Supervisar detectar infracciones e importar sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre".

Que, a lo establecido en el Art. 220° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiéndose dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que se eleve lo actuado al superior jerárquico.

Que, el Artículo 1° 1.1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de la ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, "son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de la norma de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

Que, todo administrado puede invocar el ejercicio del derecho de petición reconocida en el Art. 2° de la Constitución Política del Perú, y desarrollada en el Art. 118° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la entidad se ve obligada dar respuesta por escrito a lo solicitado.

Que, bajo la premisa fáctica y jurídica expuesta estando a los fundamentos y consideraciones precedentes, estando a las normas invocadas, los medios probatorios ofrecidos, y con las atribuciones conferidas en la ley N° 27972, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, al Informe legal N° 002-2022-HABH-GAJ-MPI y a las visaciones de estilo.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - Declarar Improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por Andrés Choque Juan Francisco, contra la Resolución Gerencial N° 964-2020-GTTSV-MPI de fecha 19 de octubre del 2020, a mérito de las consideraciones expuesta.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA



ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad al Art. 50° de la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y el Art. 228° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único de la ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, se declare por Agotada la Vía Administrativa.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Secretario General de la Municipalidad Provincial de Ica, notificar la presente resolución con las formalidades de Ley.

REGÍSTRESE COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Sra. *Emilia Luisa Mejía Venegas*
ALCALDESA

